

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, nueve (09) de junio de dos mil veintiuno (2021).**

SENTENCIA DE TUTELA No. 097

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por la señora **MARIA MIRYAM MOLINA LOAIZA**, en contra de la **EPS SURA**, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, dignidad humana, salud, seguridad social y mínimo vital.

I. ANTECEDENTES

Refiere la accionante que se encuentra afiliada a la EPS SURA y que dicha entidad no le ha cancelado la incapacidad que le fue prescrita del 15 de octubre de 2020 al 03 de noviembre de 2020 por el término de 20 días.

PRUEBAS

Aportadas por la accionante: A pesar de solicitarle en el auto admisorio que allegara los documentos relacionados en el escrito de tutela, los mismos no fueron aportados.

Aportadas por la **EPS SURA**: Con la respuesta a la acción tuitiva, se adjuntó copia del certificado de existencia y representación, copia de aviso a la accionante de fecha 02 de junio de 2021 y copia de reporte del pago de la incapacidad.

II. TRÁMITE

Mediante auto fechado 01 de junio de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante y se dispuso la notificación a la entidad accionada, para que se sirviera dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitara las pruebas que pretendiera hacer valer para su defensa.

III. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

La entidad accionada, EPS SURA manifestó que a la accionante le fue pagada la incapacidad que reclama el día 29 de abril de 2021 vía electrónica a la cuenta de ahorros No. 488418508880 del Banco Davivienda por un valor de \$ 571.450.

Por lo anterior, solicita se declare IMPROCEDENTE la acción de tutela, toda vez que no hay evidencia de vulneración alguna de derechos fundamentales de la señora **MARIA MIRYAM MOLINA LOAIZA**.

IV. PROBLEMA JURÍDICO.

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales constitucionales a la vida en condiciones dignas, dignidad humana, salud, seguridad social y mínimo vital a la accionante por parte de la entidad accionada, al no proceder a cancelar la incapacidad otorgada en el periodo del 5 de octubre de 2020 al 03 de noviembre de 2020.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

V. CONSIDERACIONES

Del pago de incapacidades laborales

La Corte Constitucional ha manifestado en Sentencia T-919 de 2009 acerca de este tema lo siguiente:

“...La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, por regla general, la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, es improcedente para solicitar el reconocimiento y pago de acreencias laborales, como quiera que, en virtud del principio de subsidiariedad que la caracteriza, existen mecanismos ordinarios de defensa establecidos en el ordenamiento jurídico para tal efecto. No obstante, de manera excepcional, se ha admitido su procedencia, según las especificidades de cada caso, cuando esos medios ordinarios no resultan lo suficientemente idóneos y eficaces para alcanzar el fin propuesto: La protección inmediata de los derechos fundamentales.

Así, en materia de acreencias laborales, las incapacidades médicas generadas en favor del trabajador, constituyen una de tales prestaciones. En este sentido, la acción de tutela es procedente para exigir su pago, cuando se logre demostrar que la ausencia del mismo, vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de quien la invoca. La Corte ha definido el derecho al mínimo vital, como aquel ingreso mínimo e indispensable para procurarse la satisfacción de las necesidades más elementales y llevar una vida en condiciones dignas.

De este modo, entendiendo las incapacidades laborales, como aquella prestación que sustituye el salario durante el periodo en el que el trabajador se encuentra inactivo laboralmente, hay lugar a su protección por vía de tutela, cuando su no reconocimiento y pago, afecta el derecho al mínimo vital, al constituir aquel la única fuente de ingresos para garantizar su subsistencia y la de su familia. Al respecto, la Corte ha dicho lo siguiente:

“El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada, según las disposiciones legales. No solamente se

constituye en una forma de remuneración del trabajo sino en garantía para la salud del trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”¹

Conforme con lo anterior, para el reconocimiento y pago de la prestación aludida, en la medida en que se trate de una enfermedad no profesional, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, regulado en la Ley 100 de 1993, dispone en su artículo 206, que para los afiliados al sistema de seguridad social, “el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto”.

El anterior precepto, al referirse a “las disposiciones legales vigentes”, se entiende que debe ser armonizado con el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, que contempla un beneficio para los trabajadores, consistente en un auxilio monetario en caso de enfermedad no profesional. Al respecto, señala la norma que: “En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el {empleador} le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante”, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo legal vigente.

De acuerdo con lo expuesto, a las Entidades Promotoras de Salud les corresponde, por regla general, el reconocimiento y pago de las incapacidades laborales expedidas a sus afiliados, a consecuencia de una enfermedad general o de origen no profesional, hasta por 180 días, pudiendo subcontratar para el cubrimiento del riesgo con entidades aseguradoras.

Aun cuando la previsión legal busca que sean las E.P.S. las que asuman el pago de dicha prestación, en caso de que el empleador incurra en mora en el pago de los respectivos aportes, el Decreto 806 de 1998, prevé, en su artículo 80, que sea éste quien asuma el pago de las incapacidades laborales que por enfermedad general se generen a favor del trabajador por todo el periodo de la misma.

Acción de tutela y principio de inmediatez

Al pronunciarse sobre el presupuesto de la inmediatez en las acciones de tutela, la Corte Constitucional en sentencia de revisión del 2005, precisó:

“Al respecto conviene recordar que según la jurisprudencia de esta Corporación, dada la naturaleza excepcional de la acción de tutela ésta debe ser ejercida dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal manera que no se convierta en un factor de inseguridad jurídica, ni en una herramienta que premie la desidia, la negligencia o la indiferencia de los accionantes.

También ha precisado la Corte que si al tenor del artículo 86 de la Constitución, con la acción de tutela se busca la protección “inmediata” de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, “... es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos”.

Es decir, que uno de los rasgos característicos de la acción de tutela es su inmediatez, pues evidentemente dicha figura “... ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.”

Además, en Sentencia T 575 de 2002 la Corte también puso de presente que para determinar la procedencia de la acción de tutela en relación con la regla de la inmediatez, entre otros elementos, “... el juez constitucional debe constatar: ‘... si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes ...’, es decir, si es predicable la existencia de una justa causa por la cual no ejerció la acción de manera oportuna.”

De manera pues que no basta con que haya transcurrido un tiempo considerable desde la amenaza o violación del derecho fundamental para descartar la procedencia del amparo constitucional, pues se hace necesario indagar si la demora en su ejercicio obedeció a una justa causa, evento en el cual tendría que aceptarse la acción de tutela.

Ya con anterioridad a citada Corporación, en la sentencia SU 622 de 2001, retomó los planteamientos expuestos en la Sentencia C – 543 de 1992, donde abordó el tema relacionado con la **subsidiaridad y la inmediatez** que debe preceder a la acción de tutela expresando, entre otras, que éstas son dos de las características esenciales de la acción de tutela en el ordenamiento jurídico colombiano, primero, por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, -esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable- y, segundo, puesto que “la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.

Carencia Actual de Objeto.

La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye el fundamento objetivo del artículo 86 de la Constitución Política Nacional.

Este amparo conlleva a la impartición de una orden de inmediato cumplimiento, siendo este el mecanismo efectivo, cuando realmente sea necesario para superar el quebrantamiento de los derechos fundamentales.

De existir otro medio de defensa judicial, como puede ser la jurisdicción ordinaria, este impide la activación del amparo constitucional, mediante la acción de tutela, por ser este un

mecanismo subsidiario y residual el cual no puede suplantar los instrumentos judiciales previstos para cada especialidad, sin embargo de manera excepcional pueda actuar este mecanismo con la condición de ser transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ese orden, cuando el accionado desarrolla los actos necesarios para deshacer el agravio, es decir, observa y satisface las pretensiones del accionante mediante la actividad tendida, arriba a lo que la teoría constitucional ha denominado la carencia actual del objeto, por ser innecesario el pronunciamiento del juez a los planteamientos de fondo del escrito de tutela.

En este sentido la Corte se ha pronunciado indicando: *"ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz"*².

Las pretensiones satisfechas carecen de sentido dentro de la acción de tutela ya que:

*"(...) pierde su razón de ser cuando durante el trámite de/proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos, fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"*³, en otras palabras, si: *"previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales"*⁴.

Sobre el particular, la Sentencia T- 154 de 2017, donde actuó como Magistrada Ponente la Doctora María Victoria Calle Correa, dispone:

"De conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto se presenta en tres hipótesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) cuando se presenta daño consumado, o (iii) cuando se está ante un hecho sobreviniente

*En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho superado, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que esta **se presenta cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario.**"* (Negrillas Propias.)

A su turno, la Sentencia T – 013 de 2017, donde actuó como Magistrado Ponente el Doctor Alberto Rojas Ríos, indicó que:

*"No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial. (...) **En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales,** en otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela."* (Negrillas propias.)

²T-011 de 2016.

³T-970 de 2014.

⁴T-168 de 2008.

I. CASO CONCRETO

La parte actora interpone este mecanismo sumarial, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, dignidad humana, salud, seguridad social y mínimo vital a la accionante por parte de la entidad accionada, al no proceder a cancelar la incapacidad otorgada en el periodo del 5 de octubre de 2020 al 03 de noviembre de 2020.

La acción de tutela fue admitida y notificada la **EPS SURA** quien se pronunció frente al mecanismo constitucional impetrado indicando que en el presente caso no existía vulneración de derechos, en tanto dicha entidad ya procedió a cancelar la incapacidad a la accionante a un número de cuenta del banco Davivienda, por un valor de \$571.450 desde el pasado 29 de abril de 2021.

La anterior información fue constatada por el Despacho, mediante llamada telefónica que se hiciera al accionante el día de hoy, 09 de junio de la anualidad, donde indica que la accionada, la **EPS SURA** ya dio cumplimiento a lo solicitado por el en esta acción tuitiva cancelando la respectiva incapacidad reclamada por el valor de \$571.450

CONCLUSIÓN

Así las cosas, esta Juez Constitucional determina, que si bien es cierto existió una controversia que generó la reclamación por vía de acción de tutela, actualmente ha dejado de existir ante el pago de la indemnización y respuesta otorgada por parte de la accionada a la accionante; por lo que a este punto de la tutela resulta inútil e irrazonable ahondar más sobre el asunto, estando en tal sentido en el caso objeto en estudio, frente a una carencia actual de objeto por “Hecho Superado” y en consecuencia la acción de tutela impetrada carecería de eficacia y razón de ser, accediéndose a la petición entablada por la parte accionada.

Por consiguiente, al desaparecer los motivos por los cuales se interpuso la presente acción, resulta inocuo realizar cualquier tipo de consideración sobre lo pretendido, presentándose sobre esta acción tuitiva el fenómeno de la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**, pues durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los motivos que dieron origen a la solicitud de amparo, siendo innecesario que se formulen observaciones especiales sobre la materia o que se profiera una orden puntual de protección⁵.

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

⁵ Sentencia T 059 de 2016 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARA que sobre la presente acción de tutela instaurada por **MARÍA MIRYAM MOLINA LOAIZA** en contra de la **EPS SURA** ha operado la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA
JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **50934d9787f98e6d24f5dffa5a618bb3d9ad2c9505fcfe4ccd9f836ec2db6110**

Documento generado en 09/06/2021 04:51:47 PM